

Crónica del mes

Marzo

El eje más dinámico de acontecimientos durante el mes de marzo fue, sin duda, el de los esfuerzos para reiniciar el proceso de diálogo entre el gobierno y el FMLN. Como fruto de esos esfuerzos, y gracias a la intermediación de la secretaria general de la ONU y del gobierno de Venezuela, las partes en conflicto acordaron, a finales de marzo, reiniciar el diálogo en Ginebra.

No fue un acuerdo fácil. De hecho, estuvo antecedido de toda suerte de airados intercambios verbales entre el FMLN y el gobierno a todo lo largo de marzo. A comienzos del mes, el día 2, en un comentario difundido por Radio Venceremos, el FMLN reiteró que "en El Salvador no hay democracia, y mientras no la haya, la lucha armada sigue siendo tan legítima como hace diez años", al mismo tiempo que advirtió al gobierno que si desistía del diálogo "nos llevará a demostrar una vez más que somos fuertes". Dos días antes, el presidente Cristiani había declarado que "el FMLN se está quedando solito, al igual que Castro en Cuba. Violeta de Chamorro no ayudará con armas a la guerrilla, con lo que ésta ha perdido mucho". El FMLN replicó que "el problema no es de armas. En cualquier lugar las compramos y tenemos capacidad para ponerlas en nuestros frentes de guerra desde cualquier parte del mundo. Centroamérica está inundada de armas que nadie controla. El gobierno, en vez de estar haciéndose ilusiones con el pronto aniquilamiento de la guerrilla, debe buscar los elementos necesarios

para conseguir la democracia a través de la negociación".

No obstante, las gestiones de intermediación de la ONU siguieron adelante. El 5 de marzo llegó al país, procedente de México, el Dr. Alvaro de Soto, enviado especial del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Previamente, De Soto se había reunido en México con una delegación del FMLN para discutir la reanudación del proceso de diálogo con el gobierno salvadoreño. El día 6, De Soto se entrevistó con el presidente Cristiani, así como con monseñor Rivera Damas y con monseñor Rosa Chávez. En declaraciones a la prensa, De Soto calificó sus gestiones como de "buenos oficios" y explicó que "no estamos actuando como transmisores de propuestas. Todavía estamos en una fase exploratoria sobre cómo montamos un mecanismo serio y sincero para la búsqueda de una solución negociada al conflicto de El Salvador".

El 8 de marzo, De Soto partió a México, para reunirse una vez más con el FMLN y presentarle los comentarios del gobierno salvadoreño. El mismo día, la Secretaría Nacional de Comunicaciones emitió un comunicado en el cual afirmaba que el presidente Cristiani había "reiterado al señor De Soto la genuina voluntad de buscar, a través de un diálogo serio y no táctico, ni mucho menos propagandístico, solución al conflicto armado, y reitera que la manera más concreta como los alzados en armas podrán demostrar dicha seriedad

sería la de interrumpir la realización de actos terroristas contra la población civil, tal como se lo demanda enérgicamente la declaración de presidentes centroamericanos de San Isidro Coronado".

El 13 de marzo, la comandancia general del FMLN anunció que, a partir del 16 de marzo, pondría en vigencia varias medidas unilaterales encaminadas a favorecer la distensión de la atmósfera del diálogo. Entre tales medidas estaban la suspensión del sabotaje al transporte público, a establecimientos comerciales y a la infraestructura telefónica, y el cese de atentados contra funcionarios públicos y familiares de militares. Al día siguiente, el gobierno emitió un comunicado de respuesta, en el cual calificó como "positivos los gestos dados a conocer públicamente por el FMLN, para contribuir a restablecer la confianza en las posibilidades reales del diálogo", y manifestó su disposición a que "las conversaciones con el FMLN se reinicien lo más pronto posible", con los buenos oficios del secretario general de la ONU y dentro del espíritu de los acuerdos de Esquipulas II.

El 16 de marzo, en un nuevo comunicado, el FMLN celebró la respuesta positiva del gobierno, pero deploró que éste no la acompañara con gestos concretos de reciprocidad a sus medidas unilaterales. Asimismo, el FMLN manifestaba que el gobierno estaba obligado moral y políticamente a concertar de inmediato gestos de buena voluntad que permitieran el ejercicio de las libertades ciudadanas, el cese de las violaciones cotidianas a los derechos humanos y toda forma de agresión a la población civil. "Advertimos que sería lamentable para las aspiraciones de paz y democracia del pueblo, que el gobierno y la Fuerza Armada intenten endurecer posiciones guerreristas creyendo en el espejismo de una posible debilidad del FMLN... Obviamente, esta equivocación sólo conduciría a un recrudecimiento de la guerra que sólo alejaría las posibilidades de una negociación y la paz y democracia para El Salvador", señalaba el comunicado.

Al ampliar el marco valorativo de las medidas unilaterales, el comandante Leonel González declaró el día 13, en México, que Estados Unidos

"no puede manejar ya el argumento del peligro comunista en El Salvador; eso ya no existe"; e indicó que el gobierno salvadoreño "está haciendo una lectura equivocada de lo que ocurrió en Nicaragua. Algunos sectores radicales piensan otra vez en la derrota militar del FMLN y esto es partir de una situación irreal". González señaló que, por el contrario, "tras las elecciones en Nicaragua pensamos que hay más posibilidades de alcanzar una solución al conflicto salvadoreño... (en Nicaragua) hubo un ejercicio pleno de la democracia y donde la revolución no se ha perdido, simplemente cambió el contexto". Finalmente, afirmó que el FMLN mantendría "las líneas operacionales militares en ascenso, pero en busca de dinamizar la actividad política en El Salvador". Por su parte, el comandante Shafick Handal manifestó que "nuestro gesto busca desbloquear el proceso... (pero) seguiremos actuando militarmente".

Una semana más tarde, la comandante Ana Guadalupe Martínez declaró, en París, que el FMLN podría apoyar a los sectores políticos de oposición en las próximas elecciones a fin de posibilitar cambios constitucionales para la paz en El Salvador. "Nuestra aceptación —aseguró— de un proceso electoral como vía para llegar al poder no es táctica, sino que es un convencimiento político y lo que pedimos es que en El Salvador, al igual que en la Nicaragua sandinista, las elecciones sean verdaderamente libres". En relación a las dificultades que Estados Unidos y la Fuerza Armada podrían oponer al proceso de negociación, la comandante indicó que Estados Unidos tendrá que definirse con hechos "si está dispuesto o no a presionar al ejército para depurarlo, profesionalizarlo, para que se someta a la democratización del país". Por otra parte, afirmó que Cristiani, "detrás de su lenguaje moderado, sostiene en realidad posiciones duras, inflexibles y ha cerrado los espacios políticos que se habían conquistado".

La reacción de la Fuerza Armada al nuevo curso del proceso de diálogo fue ambivalente. El 20 de marzo, el jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, comentó, en relación a las declaraciones de Ana Guadalupe Martínez, que "la nueva treta de los cabecillas del FMLN es la de hacer creer, a nivel internacional, que ya no son

marxistas-leninistas, sino socialdemócratas". El mismo día, en cambio, el comandante de la Fuerza Aérea (FAS), general Rafael Villamariona, formuló declaraciones bastante más moderadas. Villamariona afirmó que "el gobierno está dando todas las facilidades para que los grupos subversivos se integren al proceso democrático y creo que si el FMLN acepta las condiciones, sean bienvenidos". En relación a la actitud castrense, aseguró que "el ejército apoya todo lo que el gobierno está haciendo en el proceso de paz en El Salvador... nosotros estamos subordinados al gobierno". Sin embargo, dos días después, luego de que su yerno fuera ametrallado por un comando urbano, Villamariona manifestó indignado que "el FMLN dice que no va a atacar a la población civil y que está tratando de entablar un diálogo para llegar a la paz, pero no se ve claro ya que ellos no están en ningún momento de corazón en lo que están haciendo pues dicen una cosa y actúan en forma distinta".

Mientras tanto, en el ámbito internacional, diversos dinamismos seguían actuando a favor del proceso. El 20 de marzo, una delegación del FMLN, integrada por Shafick Handal, Francisco Jovel, Carlos Calles y Salvador Samayoa, se entrevistó en Caracas con el presidente Carlos Andrés Pérez, a quien manifestó que el FMLN consideraba que estaban dadas las condiciones para entablar nuevas negociaciones con el gobierno sobre un plan global de pacificación y democratización, aunque todavía había obstáculos en el ejército. Shafick Handal declaró a la prensa que "no quisiéramos vernos obligados a dar nuevas demostraciones de fuerza al ejército salvadoreño, pues el nivel de nuestra actividad se mantiene y creemos en una solución política". "Se equivoca —añadió— la cúpula del ejército salvadoreño con la lectura de que los hechos en Nicaragua debilitan la posición militar de la guerrilla... El presidente Daniel Ortega perdió las elecciones con un número similar de votos con los que Cristiani ganó las elecciones en El Salvador". Asimismo, Handal puntualizó que el problema de fondo no se reducía a "ponerle fin a la actividad militar, sino que es necesario abrir camino a la democratización en El Salvador". Un día más tarde, los

delegados rebeldes volvieron a entrevistarse con Alvaro de Soto, en México.

El 21 de marzo, el gobierno difundió un nuevo comunicado en el cual informaba que, tras la última reunión con De Soto, "en vista de los avances realizados a la fecha, con la colaboración del secretario general de las Naciones Unidas y sus representantes, y de los gestos anunciados por el FMLN relativos a la total suspensión de algunas acciones que afectan a la población civil, el gobierno de la República está dispuesto a reiniciar de inmediato el proceso de diálogo, conforme a los puntos discutidos con el doctor De Soto en cuanto a la forma del proceso, sin ninguna precondición". No obstante, el secretario nacional de comunicaciones, Mauricio Sandoval, indicó que todavía no existía acuerdo entre ambas partes sobre el lugar y la fecha para el reinicio del diálogo.

El 22, a través de Radio Venceremos, el FMLN señaló que los anuncios de ese tipo correspondía hacerlos al secretario general de la ONU y criticó al gobierno salvadoreño por adelantar aspectos relativos a la reanudación de las conversaciones. Pese a estos comentarios destemplados del FMLN, la atmósfera política sobre las posibilidades del diálogo era bastante optimista. En declaraciones difundidas el 23 de marzo, el ministro de justicia, Dr. Oscar Santamaría, afirmó que el gobierno consideraba que "la gestión de paz de la ONU no va a fracasar porque toda una serie de factores que se dan en este momento, dentro del contexto de la comunidad internacional, están más en favor de que el proceso sí tenga éxito". Santamaría añadió que "ya hemos adelantado bastante, definiendo el marco referencial y, en ese sentido, podemos decir que la primera etapa ya está cubierta".

El gobierno norteamericano compartía tal optimismo. El 22 de marzo, el secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos, Bernard Aronson, afirmó ante un subcomité de la Cámara de Representantes que nunca las perspectivas habían sido mejores para lograr una solución negociada al conflicto en El Salvador. Un día después, el vocero del Departamento de Estado, Ri-

chard Boucher, expresó también que "las condiciones para promover negociaciones serias sostenidas y fructíferas entre el gobierno y el FMLN nunca han sido mejores. Creemos que ambas partes han mostrado recientemente señales de buena fe. Estados Unidos, por supuesto, apoya decididamente una solución negociada a la guerra en El Salvador bajo el proceso de paz centroamericano".

El 26 de marzo, los dirigentes políticos Rubén Zamora, del Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), Guillermo Ungo, del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y Fidel Chávez Mena, del PDC, se reunieron en Caracas con el presidente Carlos Andrés Pérez para discutir las posibilidades del diálogo en El Salvador. Los políticos salvadoreños resaltaron los obstáculos que para la reanudación del diálogo representaban la vigencia del estado de sitio y el deterioro galopante de los derechos humanos.

El 28, el presidente Cristiani viajó a Caracas, a bordo de un avión de la fuerza aérea venezolana, para una visita oficial de tres días. El 29, analizó junto con Carlos Andrés Pérez la situación política en El Salvador y las posibilidades de cooperación económica, comercial y cultural entre ambos países. Ese día, en declaraciones a la prensa, admitió que se había dado en El Salvador un deterioro de la situación de los derechos humanos y que había varios grupos "que son violatorios de esos derechos", pero no los identificó, al tiempo que atribuyó tales abusos a la situación de guerra "que ha sido impuesta por el FMLN" y que es la que "genera estas violencias". Al visitar la sede del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Cristiani afirmó que en El Salvador empezaba a verse "la luz al final del túnel". "Esperamos en pocos días —añadió— poder conformar un nuevo esquema de proceso de paz". Por su parte, el mismo día, el canciller Pacas Castro, miembro de la comitiva presidencial, declaró que el gobierno salvadoreño no pondría "más condiciones previas al FMLN para reiniciar el diálogo". Por otra parte, Pacas Castro rechazó las acusaciones de los partidos salvadoreños de oposición sobre un resurgimiento de los escuadrones de la muerte bajo la gestión de ARENA, e indicó que "hay políticos que hacen declaraciones en el exterior que no se

atreven a efectuar en El Salvador". En relación al "repudiable incidente" de la masacre de la UCA, afirmó que dicho asesinato "no significa que haya una política de violación de los derechos humanos en la Fuerza Armada", ya que en el ejército "hay gente buena y hay gente mala" como en todas las instituciones.

El 30, Cristiani declaró que estaba optimista —aunque no con un optimismo "desbordante"— sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con el FMLN a corto plazo y se mostró partidario de decretar una amnistía como "parte fundamental para lograr un acuerdo de paz". Aseguró que su gobierno daría las mayores facilidades si el FMLN decidía convertirse en partido político. En relación al papel de la Fuerza Armada en el proceso, rechazó el término "depuración" propuesto por el FMLN, y habló más bien de "profesionalización". Admitió que en el pasado hubo "abuso por parte de individualidades" de la Fuerza Armada, pero indicó que también el FMLN había cometido los suyos; en cualquier caso, puntualizó que tal situación debía solventarse, pues "no puede haber nadie por encima de la ley". Asimismo, indicó que cuando se logre la paz "no habrá necesidad de tener un ejército del tamaño actual". Por su parte, Carlos Andrés Pérez expresó su confianza de estar "a las puertas de una solución al conflicto salvadoreño" y aseguró que existe "una poderosa voluntad política en todos los protagonistas del conflicto para llegar al diálogo". Ese día, el portavoz de la ONU, Francois Giuliani, anunció que el gobierno salvadoreño y el FMLN, tras los múltiples contactos tenidos con Alvaro de Soto, habían acordado reunirse con Pérez de Cuéllar el 4 de abril, en Ginebra, para discutir la mecánica para reiniciar el proceso de diálogo. Al confirmar el anuncio, el secretario nacional de comunicaciones, Mauricio Sandoval, afirmó que "el gobierno ha asumido el proceso con toda seriedad y no quiere que este diálogo sea utilizado con fines propagandísticos"; y manifestó la disposición gubernamental a incluir en la agenda los temas de la democratización, la administración de la justicia y las elecciones. El día anterior, la Fuerza Armada había emitido un comunicado en el cual expresaba su "firme convicción de con-

tinuar apoyando el proceso democrático y los derechos en que se sustenta, de velar por el respeto a la Constitución de la República y las leyes, de mantener la apoliticidad y subordinación del instituto armado y de acompañar los esfuerzos por la paz" del presidente Cristiani.

A despecho de las gestiones de diálogo, la guerra siguió su marcha. Los sectores más guerrilleros del ejército, alentados por la derrota electoral del sandinismo, pensaban que el FMLN quedaría más aislado y debilitado que nunca, ya que no podría seguir siendo abastecido de armas desde Nicaragua. El curso de las acciones militares pronto mostró un mentís a tales apreciaciones.

El 5 de marzo, el FMLN lanzó varios ataques simultáneos contra los puestos militares que daban seguridad al centro penal "La Esperanza", ubicado en Mariona (San Salvador), y contra las posiciones de la Guardia Nacional ubicadas en la periferia de Santo Domingo (San Vicente) y de San Isidro (Cabañas). Un día después, unidades rebeldes de artillería ametrallaron un helicóptero artillado en el momento en que levantaba vuelo en las inmediaciones del cantón Guancorita (Chalatenango). A bordo del aparato se transportaban el Fiscal General de la República, Dr. Mauricio Colorado; miembros de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos; un equipo de prensa de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), integrado por el reportero Samuel Arias, el camarógrafo Manuel Antonio Canjura Díaz y el sonidista William Madrid; y el corresponsal de *El Diario de Hoy*, Antolín de Jesús Herrera, quienes regresaban de cubrir la exhumación de los campesinos muertos el 11 de febrero durante el roqueteo de la repoblación por parte de la Fuerza Aérea (ver crónica de enero-febrero). Con excepción del fiscal, todos los pasajeros del helicóptero resultaron heridos, incluyendo a los tripulantes, capitán Sergio Cáliz Molina y subteniente Douglas Tóchez Artiga. Uno de los artilleros murió al intentar responder al fuego del FMLN. El frente guerrillero Modesto Ramírez emitió un comunicado lamentando "los daños ocasionados a los periodistas, a quienes reiteramos nuestras recomendaciones de no abordar vehículos o aviones militares". El fiscal denunció el incidente como una incalificable violación de

los derechos humanos. En cambio, consideró que el roqueteo de la repoblación por parte de la fuerza aérea, tres semanas antes, había sido un suceso "normal" producto de la situación de guerra imperante en la zona.

Entrada la segunda semana del mes, la actividad militar del FMLN se concentró en los departamentos de San Salvador, Usulután y San Miguel. En San Salvador, unidades guerrilleras hostigaron posiciones militares ubicadas en los municipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, en la periferia norte del área metropolitana. En Usulután, el 9 de marzo, el FMLN atacó las posiciones militares de Santiago de María; durante los enfrentamientos, los cuales se prolongaron 14 horas, murieron 14 efectivos militares y resultaron heridos otros 6.

También hubo combates de consideración en la periferia de Ciudad Barrios (San Miguel), donde el FMLN habría sufrido 19 muertos y 25 heridos, y causado 2 muertos y 5 heridos al ejército. Otros combates ocurrieron en Usulután, donde murieron 3 guerrilleros y resultaron heridos 4 soldados; en las afueras de Santa Tecla; y en Cinquera (Cabañas). En Santa Tecla murió un insurgente, y 2 más en Cinquera.

Por su parte, la Fuerza Armada reforzó sus operativos de contrainsurgencia en las zonas de persistencia guerrillera. Así, el 19 de marzo, inició en el área del cerro de Guazapa una nueva operación de "desalojo" de presuntas concentraciones del FMLN mediante bombardeos aéreos y terrestres y operativos de rastreo y patrullaje por parte de unidades de infantería. Otro operativo contrainsurgente se desarrolló en la zona norte del departamento de La Paz, a cargo de efectivos del Destacamento Militar de Ingenieros.

Paralelamente, el ejército continuó con sus operativos de rastreo y patrullaje rutinarios, durante los cuales desmanteló dos campamentos guerrilleros en los departamentos de Cabañas y Chalatenango. En este segundo departamento, las tropas gubernamentales desmantelaron también una fábrica de explosivos, en la cual decomisaron 50 artefactos, y descubrieron dos depósitos de armas y pertrechos de guerra. En San Miguel, el

ejército descubrió un depósito con 100 explosivos, mientras que en Santa Elena (Usulután) descubrió un arsenal con 35 fusiles, 2 piezas de artillería y un lanzacohetes.

El anuncio del 13 de marzo sobre sus medidas unilaterales para desescalar la guerra no fue óbice para que el FMLN profundizara su línea de actividad propiamente militar. El 15 de marzo, unidades guerrilleras emboscaron un camión militar en San Salvador, hiriendo a dos soldados. El día 19, también en San Salvador, otras unidades rebeldes atacaron un puesto policial y dos posiciones militares de la Primera Brigada de Infantería. En el ataque al puesto policial murieron murieron 2 agentes de la Policía Nacional. El mismo día, el FMLN atacó posiciones militares ubicadas al sur de la ciudad de Usulután, sin que se informara de bajas. El 20 de marzo, realizó otro ataque contra posiciones policiales en San Salvador. Al día siguiente, columnas guerrilleras atacaron un puesto de la defensa civil en las inmediaciones de Ilobasco (Cabañas), donde mataron a 4 paramilitares e hirieron a otros 5.

A partir de la tercera semana del mes, la actividad militar mostró cierta focalización en algunos de los frentes tradicionales de guerra. Los combates de mayor envergadura ocurrieron el día 21 en los alrededores de Las Vueltas (Chalatenango). Los enfrentamientos se prolongaron por dos días, y tuvieron un saldo de 12 guerrilleros y 2 soldados muertos, más 17 heridos en cada bando.

Otras acciones de considerable alcance ocurrieron en el departamento de Usulután. Según el COPREFA, en el curso de uno de los combates, el cual se prolongó más de 14 horas, murieron 14 soldados y resultaron heridos 6 más. En el área metropolitana de San Salvador, el FMLN llevó a cabo varios ataques contra patrullas y posiciones militares, con saldo de 4 efectivos muertos y 22 heridos.

En conjunto, los departamentos que mostraron mayor actividad bélica durante el mes fueron Chalatenango, donde tuvieron lugar 9 combates de encuentro y 2 acciones ofensivas del FMLN; San Salvador, donde ocurrieron 7 combates y 2 ata-

ques; Morazán, donde se combatió en 7 ocasiones; Cuscatlán, que fue escenario de 4 combates de encuentro, al igual que Usulután, donde además se habrían registrado 3 ataques guerrilleros. Menor intensidad mostró el conflicto en los departamentos de Cabañas (1 combate y 3 ataques), San Miguel (3 combates), San Vicente (2 combates y 1 ataque), Santa Ana (1 emboscada) y La Libertad (1 combate y 1 ataque).

El saldo de estas acciones fue el siguiente: 110 muertos y 90 heridos en las filas del FMLN, y 27 muertos y 83 heridos en las del ejército. Por otra parte, la Fuerza Armada aseguró que, como resultado de sus operativos de rastreo y patrullaje en varias zonas del país, sus tropas decomisaron 114 fusiles de diverso calibre, 11 piezas de artillería (incluyendo un misil tierra-aire), 827 explosivos, 6 ametralladoras, 4 lanzacohetes e igual número de aparatos de comunicación. En lo que respecta al sabotaje, el FMLN dinamitó 4 postes y 22 torres del tendido eléctrico; dañó parcialmente cuatro locales comerciales; saboteó tres autobuses; y destruyó las bodegas de una finca cafetalera.

Por su parte, en su balance mensual de marzo, el FMLN aseguró que sus fuerzas causaron 378 bajas al ejército, entre muertos y heridos, incluyendo a 8 oficiales, 2 pilotos y 20 clases; y que averiaron 9 helicópteros y derribó un avión militar.

En medio de tal contexto de guerra, la situación de los derechos humanos siguió en franco proceso de deterioro. El tema de los refugiados, en particular, adquirió relevancia especial, a raíz del hostigamiento del ejército contra los repatriados recién llegados de Honduras. El 3 de marzo, unos 1,200 refugiados, 500 de ellos menores de edad, quienes habitaban el campamento de San Antonio, en Honduras, retornaron al país, para repoblar la aldea Gualcho, en la jurisdicción de Nueva Granada (Usulután). Con su regreso, se cerró un segundo campamento de refugiados en Honduras, después del cierre de Colomocagua.

La comunidad de repatriados de Meanguera, en el norte de Morazán, denunció un cerco militar impuesto por el Destacamento Militar Nº 4, cuyos efectivos impedían el flujo normal de los

abastecimientos. Por su parte, el 12 de marzo, el Comité Cristiano de Protección a los Desplazados (CRIPDES) denunció que "las repoblaciones y asentamientos de refugiados en el país continúan siendo blanco de una serie de abusos por parte de autoridades militares, como capturas arbitrarias y cercos militares que impiden el ingreso de alimentos". Según el CRIPDES, la Fuerza Armada no permitía salir de sus comunidades ni abastecerse de alimentos a los habitantes del asentamiento de Copapayo (Cuscatlán). Dificultades similares afrontaban las repoblaciones de la costa sur de Usulután, La Paz, Cabañas y San Vicente. Asimismo, el CRIPDES denunció que el ejército mantenía militarizadas las repoblaciones y a menudo originaba balaceras fingiendo combates con el FMLN, para tener pretextos con los cuales justificar sus incursiones a los campamentos de los repatriados.

Las tensiones entre las iglesias históricas y el gobierno fueron nuevamente otro punto de interés. El 3 de marzo, una delegación ecuménica alemana se reunió con el presidente Cristiani y con el jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, para expresarles su preocupación por la persecución contra sectores de Iglesia por parte de la Fuerza Armada. El coronel Ponce dijo a la delegación que "no existe persecución contra la Iglesia", pero admitió estar "preocupado por un tipo de ministerio eclesial que él considera no corresponde" a la función de la Iglesia. Según Ponce, los "problemas" entre ciertos sectores de Iglesia y la Fuerza Armada se debían a la distinta "comprensión del ministerio de la Iglesia que tienen, por un lado, los militares, y, por otro, la Iglesia católica". La delegación, por su parte, trató de explicar a Ponce "que la Iglesia debe encargarse de la justicia social. La opción preferencial de la Iglesia es para con los más necesitados".

En el ámbito laboral, el rasgo más notable del mes lo constituyó la relativa normalización de la actividad reivindicativa de las organizaciones populares tras la dura represión sufrida durante noviembre y diciembre. Pese a la prórroga del estado de sitio, el movimiento laboral emprendió una enérgica movilización de protesta contra las más recientes medidas de política económica de

ARENA. En particular, el décimo aniversario de la reforma agraria fue ocasión para que diversas organizaciones laborales renovaran sus demandas en favor de la profundización del proceso agraria, que ARENA pretendía reorientar en función de su programa de liberalización económica.

El 6 de marzo, la Asociación Democrática Campesina (ADC) realizó un foro "Por la defensa y profundización de la reforma agraria", al cual asistieron delegados de 25 organizaciones de campesinos y cooperativistas. Los participantes discutieron el problema de la deuda agraria y solicitaron al gobierno condonarla. También demandaron la suspensión de toda resolución de la Corte Suprema de Justicia que afectara el proceso de reforma agraria, la profundización "real y democrática" del mismo, y el cese a las violaciones de los derechos humanos.

El mismo día, la UNOC afirmó que "los 10 años que marcan la superación del campesino están en peligro con las últimas medidas contra el sector, implementadas por el gobierno... La reforma agraria constituye uno de los bastiones más importantes para la democracia en el país". Asimismo, denunció que la parcelación de las tierras tiene "el objetivo de dividir económica y organizativamente al campesino... La privatización de la banca junto a aquella medida (parcelización) permitiría el regreso de tierras a sus antiguos dueños"; y reveló que "el ISTA está obligando a las cooperativas a aceptar un co-administrador o no habrá créditos para la cosecha 1990-1991".

Por su parte, los presidentes del ISTA y de FINATA, Ramón Aparicio y Raúl García Prieto, respectivamente, afirmaron que el proceso de reforma agraria había sido contraproducente para los campesinos, porque éstos no estaban preparados para corresponsabilizarse de tal iniciativa. Empero, reiteraron que durante su gestión trabajarían para consolidar el proceso en la línea de incrementar el número de pequeños propietarios agrícolas individuales.

El trasfondo del aniversario de la reforma agraria fue, una vez más, la represión. En su foro del 6 de marzo, la ADC denunció la captura de Rosa Mérida Aguirre, de FENACOA, ocurrida

tres días antes en Santa Ana. El CRIPDES, por parte, denunció la destrucción casi total de su local, luego de que éste fuera allanado por efectivos de la Primera Brigada de Infantería desde la ofensiva guerrillera de noviembre. El 15 de marzo, la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) denunció la captura de seis de sus miembros, cuatro de ellos detenidos el 7 de marzo en Metapán, y los otros dos, posteriormente, en Zacatecoluca.

Por su parte, diversas organizaciones de trabajadores públicos continuaron denunciando los despidos masivos que desde comienzos del año se habían registrado en diferentes ministerios y dependencias estatales autónomas y semi-autónomas. El 15 de marzo, la CTS denunció que seguían despedidos más de 500 trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (ANTMAG), algunos de ellos con más de 20 años de servicio. El día 21, doce de los trabajadores despedidos, miembros de ANTMAG, iniciaron, en la iglesia de El Rosario, una huelga de hambre en protesta por los despidos.

La huelga recibió adhesiones de solidaridad de numerosas organizaciones nacionales e internacionales. El 24 de marzo, FESINCONSTANS exigió al Ministerio de Trabajo implementar los mecanismos necesarios para resolver éste y otros conflictos laborales. En un campo pagado difundido el 26, el MNR se solidarizó con los huelguistas y criticó, en general, la política gubernamental de despidos masivos. El 27, la Asociación de Trabajadores de la CEL (ATCEL) exigió al gobierno el reinstalo de los trabajadores despedidos en el MAG, así como el cese de las medidas económicas lesivas a los intereses populares y la reanudación seria del proceso de diálogo con el FMLN.

La lucha en favor del diálogo y las protestas contra el estado de sitio siguieron siendo otro eje importante de movilización popular. El 7 de marzo, el Comité Permanente del Debate Nacional difundió una carta abierta a la asamblea legislativa, en la cual se pronunciaba en contra de la prórroga del estado de sitio. Análogamente,

FEASIES denunció el estado de sitio como una medida para contener las aspiraciones de paz del pueblo, mientras que el dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), José Luis Grande Preza, señaló la necesidad de un trabajo arduo por la paz, aprovechando la nueva coyuntura de distensión en el istmo. El 8 de marzo, con ocasión de la celebración del día internacional de la mujer, el Comité Femenino del STISSS (COFASTISSS) exigió la reanudación de las negociaciones entre el gobierno y el FMLN para ponerle fin a la guerra. A esta exigencia se unió, el día 9, la Asociación de Mujeres Marginales (AMMA).

El 15 de marzo, la UNTS, FEASIES, la CTS y otras organizaciones, aplaudieron, como un gesto de buena voluntad, el anuncio del FMLN de suspender, a partir del 16 de marzo, varios rubros de su actividad de sabotaje.

Las exigencias de paz se vieron potenciadas por las celebraciones del décimo aniversario del asesinato de Monseñor Romero. Con tal motivo, entre el 22 y 24 de marzo, el arzobispado organizó unas jornadas de reflexión teológica y pastoral sobre la figura de Monseñor. Por su parte, el 23 de marzo, el Comité Permanente del Debate Nacional realizó una asamblea pública similar a la celebrada los días 3 y 4 de septiembre de 1988 (ver *ECA*, 478-479). Esta vez se hicieron presentes 69 fuerzas sociales, 10 más de las que asistieron a la asamblea de 1988. El 24, el Comité realizó una marcha por la paz hacia catedral, donde se unió a la celebración litúrgica organizada por el arzobispado, en la cual participaron conspicuas figuras de la iglesia latinoamericana o solidarias con ella, como monseñor Ivo Lorscheider, monseñor Roger Mahoney, don Pedro Casaldáliga, Gustavo Gutiérrez, etc. En el mismo marco de celebraciones, monseñor Rosa Chavez anunció que en breve se iniciarían formalmente los trámites para la canonización de Monseñor Romero.

En el mismo marco de celebraciones, el 25 de marzo, los repatriados de Meanguera inauguraron la ciudadela "Segundo Montes". En los actos participaron funcionarios del gobierno, representantes

de las iglesias y de los organismos humanitarios y los 8,400 repatriados que regresaron de Honduras en meses recientes. El comandante del Destacamento Militar N° 4, coronel Humberto Corado, presente en la inauguración, aseguró que, puesto

que la ciudadela contaba ya con la aprobación del gobierno, los efectivos de su guarnición brindarían a los reproductores todas las facilidades para que trabajaran normalmente.

